

**Auto No:** AI-113  
**Proceso:** Verbal -Impugnación de actas de asamblea-  
**Demandante:** Guillermo Enrique Castaño Otálvaro y otro  
**Demandado:** Conjunto Residencial Cataluña P.H.  
**Radicado:** 05001 31 03 017 2023 00184 01  
**Asunto:** Confirma auto apelado.

**TRIBUNAL SUPERIOR  
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN  
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, Veintisiete (27) de noviembre del dos mil veintitrés (2023)

Concita la atención de la Sala desatar el recurso de apelación formulado por el demandante, en contra del auto fechado el día veinte (20) de junio del dos mil veintitrés (2023), proferido por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, al interior del trámite del proceso Verbal incoado por Guillermo Enrique Castaño Otálvaro y Leny Patiño Montoya en contra del Conjunto Residencial Cataluña P.H., mediante el cual se rechazó la demanda de la referencia.

**I. ANTECEDENTES**

**1. Supuestos fácticos vinculados al presente caso.** Como hechos relevantes con miras a desatar la alzada, se tiene que, en providencia del ocho (30) de mayo del año pasado, el juez cognoscente decidió inadmitir la demanda por considerar que adolecía de varios requisitos, pero como no fueron satisfechos la rechazó, pero para el caso *sub examine* sólo resulta importante analizar el motivo de inadmisión que llevó a materializar el rechazo de la acción, esto es, el que tiene que ver con la notificación, cuando previamente requirió para que el demandante: *“indicará el lugar de notificación de cada uno de los codemandados, y en caso de mencionar un correo electrónico, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar (artículo 8 de la Ley 2213).*

Con el fin de cumplir con lo anterior, el demandante expuso que *“el lugar de notificación de cada uno de los codemandados es la misma de la administración*

*del Conjunto Residencial Cataluña: José Aníbal Rivera Leal, ya que todos los codemandados están vinculados con dicha administración en sus diferentes cargos.*

**2. Del auto impugnado.** El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en providencia del veinte (20) de junio de esta calenda, decidió rechazar la demanda, bajo el argumento que: *“no se considera cumplida la exigencia en cuestión, por cuanto es evidente, conforme a las reglas de la experiencia que, cada uno de los codemandados ha de tener en uno de los apartamentos del Conjunto Residencial Cataluña o incluso por fuera de él, su propia dirección física en que recibe notificaciones, o bien, su propia dirección electrónica”*, aunado a que tampoco acompañó las pruebas de las comunicaciones que se supone previamente debió enviar a las personas codemandadas al único correo electrónico indicado para la notificación de todos, pese así exigirlo el artículo 8 de la ley 2213 de 2022.

**3. De la alzada.** En la oportunidad procesal pertinente el actor interpuso recurso de apelación, aduciendo, en síntesis, que cumplió con la respectiva carga procesal, porque, en primer lugar, el artículo 8 de ley en cita, lo que establece es la notificación de las providencias y en este caso, no se ha emitido alguna. En igual sentido, justificó la información que brindó en torno a los correos electrónicos, precisando que *“no se habla de correos electrónicos personales, simplemente hace referencia al correo electrónico al cual se puede notificar al demandado, en este caso a los codemandados”*, tal y como ocurrió en una demanda de similares características, en donde al único demandado se le notificó al correo del Conjunto Residencial por ser empleado de dicho Conjunto y no se le notificó a su correo personal y aun así se admitió la demanda.

Esbozados así los motivos de disenso de la parte demandada, los cuales dieron lugar a la decisión apelada, procede la Sala, a decidir el recurso impetrado con fundamento en las siguientes,

### III. CONSIDERACIONES

**1.** Sea lo primero indicar que, el legislador, al codificar nuestro Compendio Procesal Civil, tuvo a bien la implementación de una serie de

exigencias encaminadas a precaver el desgaste innecesario del aparato judicial, propendiendo por garantizar el éxito de los procesos y, además, evitar el proferimiento de fallos inocuos o carentes de relevancia jurídica, contrarios a la equidad y la justicia, caro cometido por el que se propende desde la presentación de la demanda.

Es así que, si la demanda cumple con las exigencias establecidas en el estatuto procesal, deberá devenir su admisión y, en caso contrario, habrá de rechazarse, sin embargo, el mismo estatuto procesal contempla la figura de la inadmisión, como una oportunidad procesal en la que el juez indica al extremo activo las fallas que presenta el escrito contentivo de su acción, para que, en el término legalmente instituido -cinco días (5) para el caso en comento-, este subsane los defectos de los cuales aquella adolezca, tareas que han sido definidas taxativamente por el legislador y, que por tanto, se encuentran establecidas en los artículos 82 y 90 del Código General del Proceso.

Sobre este tópico, la Corte Constitucional en Sentencia C420/2020 al estudiar la constitucionalidad del Decreto 806/ del 2020 reiteró el fin del auto inadmisorio para lo cual citó un aparte de la sentencia C-832 del 2002 en la que precisó que : *“evitar un desgaste en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que se pretende, es garantizar el éxito del proceso, evitando un fallo inocuo o que la presentación de un escrito no involucre en sí mismo una controversia, es decir que no haya una litis definida”*, providencia en la que también se previó que:

*“...La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal. En consecuencia, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser aceptada, de lo contrario tendrá que ser rechazada. Sin embargo, este procedimiento no es tan rígido, pues el legislador contempla la figura de la inadmisión dando la oportunidad procesal al demandante, para que, dentro del término de cinco días, corrija los defectos que soporte la presentación de su demanda, una vez el juez se los indique. (...) Entonces, debe entenderse que el auto que inadmite una demanda lleva consigo **la procedencia o improcedencia posterior de la misma**, pues es el demandante quien cuenta con la carga de subsanar los defectos de que ella adolezca, defectos que han sido establecidos previamente por el legislador y que son señalados por el juez de conocimiento para que sean corregidos”<sup>1</sup>... (Negrillas fuera de texto).*

<sup>1</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 833 de 2002. M.P. Dr. Alberto Beltrán Sierra.

De lo anterior se deduce que el examen que realizará el Juez en esta etapa procesal, vinculará aspectos eminentemente formales o procedimentales, sin que pueda inmiscuirse en asuntos de naturaleza sustancial, ya que los mismos, por lógica, serán objeto de estudio en la sentencia.

**2. El Caso Concreto.** Conforme a lo expuesto, corresponde analizar si las razones que esgrimió el Juez para rechazar la demanda ante la ausencia de indicación del lugar de notificación de los codemandados resulta de recibo, o en su defecto, si le asiste la razón al apelante, cuando advierte que dicho requisito se soslayó al precisar que el lugar de su notificación es la misma del administrador del Conjunto Residencial, esto es, la del señor José Aníbal Rivera por su grado de vinculación con la Unidad.

Frente al anterior argumento, considera el Tribunal que le asiste la razón al Juez cuando rechazó la demanda, en el sentido que el demandante no cumplió con la carga procesal impuesta. Para ello, basta revisar el numeral 8 del artículo 82 del C.G.P, cuando prevé expresamente que deberá indicarse *“el lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes (...) recibirán notificaciones personales”*. Y asimismo el artículo 6 de la Ley 2213 del 2022 *“la demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados (...) so pena de inadmisión”*. Normativa que debe analizarse conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la regla en cita, en cuanto manda que: *“el interesado afirmará bajo la gravedad de juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar”*.

Atendiendo a los anteriores fundamentos normativos, se advierte que el recurrente elevó en causa propia y en representación de la señora Leny Patiño Montoya demanda de impugnación de actos de asamblea en contra del representante legal del Conjunto Residencial Cataluña –señor Jose Anibal Rivera Leal-, contra los miembros del Consejo de la Administración (*Magnolia María Figueroa, Adriana María Cardona, Luz Astrid Álvarez Escobar, José Isaías*

Montoya García, Darío Sánchez Álzate, Sergio Anibal Sánchez Salazar, Ubaldo Cossío Ochoa, Jairo Patarroyo Mora y Eugenia María Higueta) Lauren Carolina Sepúlveda Villa – Revisora Fiscal) Sandra Liliana Posada Zapata –Revisora Fiscal Suplente- e Isabel Cristina Cano Salazar-Contadora-.

Sujetos procesales frente a los que se limitó a indicar como lugar de notificación –el domicilio de la propiedad horizontal-, bajo la creencia que “*con ocasión al grado de vinculación con la administración del inmueble*”, pueda entenderse como el lugar en donde deben surtirse los actos de comunicación procesal. Afirmación que si bien no desnaturaliza el contexto que envuelve la notificación, sí se entiende que aquella corresponde al paraje concreto en que pueden ser ubicadas las personas con el fin de darles a conocer los actos procesales que así lo requieran, con independencia de que sea o no su domicilio, en el caso de la notificación física, puede existir una dirección de notificación común. Lo cierto es que el recurrente no allegó documento o, en su defecto, otro material probatorio que permitiera inferir que efectivamente dicha dirección, así como la electrónica –conjuntocataluna@hotmail.com-, corresponde a cada uno de los codemandados para efectos de surtir las informaciones o enteramientos de las providencias de un proceso o de actuaciones judiciales, sino que, por el contrario, sólo se limitó a “suponer” que así era, sin cumplir, con el presupuesto dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 2213 del 2022.

Bajo el anterior panorama, para el suscrito Magistrado es claro que razón le asistió al Juez A quo en rechazar la demanda, pues el legislador al establecer los requisitos de la demanda, determinó, entre ellos, que la dirección de notificación impone una carga adicional que no puede limitarse bajo una sola afirmación, sino comprobar que efectivamente sí corresponde al canal digital o físico indicando por el actor.

Así las cosas, emerge palmaria la confirmación del auto objeto de apelación, en tanto, como se observa, el demandante no cumplió con los requisitos de inadmisión exigidos en providencia del (30) de mayo del año en curso, ya que se abstuvo de informar el lugar de notificación, sin cumplir lo

dispuesto en las normas adjetivas que regulan la materia y sin que tenga razón en advertir hábilmente que aquí no se trata de notificar ninguna providencia a los demandados cuando tan siquiera ha sido admitida la demanda, olvidándose que precisamente la información de él requerida es para que pueda comunicarse la demanda cuando sea admitida, pero como tozudamente se negó a suministrar la información requerida, es por4 lo que devino en su contra el rechazo de la demanda.

De esta manera y por las razones expuestas, el ***Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín***, Sala Unitaria Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

### III. RESUELVE:

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto de fecha veinte (20) de junio del dos mil veintitrés (2023), proferido por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, de conformidad con las razones expuestas de manera precedente.

**SEGUNDO:** Devolver el expediente al Juzgado de origen.

**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE,**

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO  
MAGISTRADO**

Firmado Por:  
Julian Valencia Castaño  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

**Sala 010 Civil**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **de00ef187f7fca9d72eca0dfdab0b9213968c77f6071c02395f272327770ae42**

Documento generado en 27/11/2023 09:54:28 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**